P. A. IBÁÑEZ (editor), *Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción*, Trotta, Madrid 1.996.

El presente libro se compone del conjunto de ponencias presentadas en el curso de verano *Crisis de la jurisdicción en la crisis del Estado de Derecho: Italia-España, una reflexión comparada*, celebrado en El Escorial en 1.994 y organizado por Jueces para la Democracia y la Universidad Complutense de Madrid. Concretamente, se compone de once trabajos de diversos autores, italianos y españoles, cuyas disciplinas de estudio y trabajo son también distintas: magistrados, fiscales, catedráticos de Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho procesal. De esta manera, se ha pretendido (y conseguido) un enfoque lo más general posible a la hora de abordar el problema central del curso y, naturalmente, del libro: la presencia de la corrupción en las sociedades democráticas occidentales, en especial en Italia y en España, y los medios y modos de los que dispone la jurisdicción (como pilar que es del Estado de Derecho que teóricamente rige en estos dos países) para contribuir a su mitigación e, incluso, eliminación.

En la *Introducción* al libro, P. A. IBÁÑEZ se refiere al problema partiendo de lo que significa la experiencia del poder estatal: "... ¿cómo distinguir el [poder] de las instituciones estatales legítimas, del ejercido por una banda de ladrones?" (p. 9). Esta consideración nace del hecho de que, en los últimos años, en los Estados considerados democráticos (Italia, España y Francia), las instituciones de poder se han manifestado refractarias al Derecho y, por tanto, se han convertido en campo de grandes fenómenos de corrupción. Según el autor, tal circunstancia obliga a no considerar tan alegremente, como de costumbre se hace, el término democracia, y a sustituirlo (tomado de J. R. CAPELLA) por la expresión situaciones políticas en acto; sin duda porque el modelo actual de Estado de Derecho en curso poco tiene que ver con su plasmación y sus índices de realización empírica. Según P. A. IBÁÑEZ, esta impresión ha estado siempre en la calle (en su sentido común, como lo demuestra la frase popular una cosa es predicar y otra dar trigo, a propósito de la actuación real de las instituciones del Estado y los políticos que las gestionan); sin embargo, no ha tenido tanto predicamento entre los juristas, que imbuidos en el formalismo, se han movido con la idea interesada de que la realidad es como la Constitución dice que debería ser. Ante esta situación política los jueces se han visto obligados a intervenir por razón del principio de legalidad y, por ello, han sido acusados de judicializar la política, cuando en realidad, en palabras de autor, "... lo cierto es que esta última connotación sólo

resulta pertinente en la medida en que los justiciables tienen esa condición, porque las actuaciones judiciales incómodas son irreprochables –por debidas– desde el punto de vista del principio de legalidad" (p. 11). En consecuencia, la patología actual no se debe a los jueces, sino al marco de la política, al haberse desvirtuado su función ideal de "... noble actividad al servicio de todos" (p. 12). Esto no significa, según el autor, eliminar de la crítica al poder jurisdiccional, cuya labor plantea también múltiples problemas de control; sino de reconocer que esta función es legítima de aquél en virtud del principio de legalidad en el Estado de Derecho. Por otra parte, su labor se limita exclusivamente al caso concreto, deslegitimando políticamente al sujeto en cuestión, por lo que no puede esperarse de los jueces, frente a este grave problema, una respuesta "... en clave de reconstrucción" (p. 12). Aún así, la jurisdicción es uno de los mecanismos de control que tiene el Estado de Derecho para luchar contra estas situaciones patológicas y, como tal, no puede permitirse el lujo de renunciar a él, ya que su puesta en práctica (por su cometido constitucional) constituye "... un relevante factor de democracia" (p. 13).

En otro sentido, el autor denuncia la tendencia de autoprotección que últimamente se está dando en los países democráticos por parte de los grupos políticos afectados en sus intereses cuando actúa el poder judicial para atajar el fenómeno de la corrupción. Así, la autoamnistía en Francia, el reforzamiento de los privilegios procesales de los posible encausados en España o la politización de la institución del Ministerio fiscal en Italia (ya existente en España). Ante estas desalentadoras circunstancias "... es urgente –según el autor– dar satisfacción a una doble necesidad: la representada por la recuperación del sentido y de la dignidad de la política, que habría de pasar, cuando menos, por significativas reformas en los sistemas electorales y la puesta a punto de un eficaz dispositivo de garantías contra las degradaciones partidocráticas del parlamentarismo. Y la constituida por el restablecimiento de los mecanismos jurídico-institucionales cuyo deterioro ha hecho posible los recusables fenómenos de criminalidad y otros, no por menos graves menos significativos, que han eclosionado en tantos Estados de Derecho de estos años" (p. 13). Tal tarea resulta difícil, según el autor, por el carácter transnacional del fenómeno y la falta de movilización y pasividad de las sociedades occidentales en las que se ha manifestado.

El segundo ensayo, con el título *El Estado constitucional hoy: el modelo y su divergencia de la realidad*, escrito por el catedrático de Filosofía del Derecho L. FERRAJOLI, comienza por exponer la situación actual de crisis en los sistemas políticos democráticos; sobre todo en lo que concierne a su carácter representativo (su capacidad para representar a la sociedad y realizar

la voluntad de la mayoría) y a la sujeción a la ley de los poderes públicos, el control de legalidad de sus actuaciones y su puesta en práctica para tutelar y satisfacer los derechos garantizados constitucionalmente. El primer elemento corresponde a la dimensión de democracia política y representativa del paradigma democrático, y el segundo al Estado constitucional de Derecho como otra de las dimensiones de este paradigma. Según el autor, ambos elementos se encuentran simultáneamente afectados por la crisis. Para constatar tal situación toma como ejemplo el caso italiano, concretado en el Gobierno de Berlusconi.

L. FERRAJOLI parte de la idea de que en Italia existe un "... doble Estado" (p. 16): el oficial y el clandestino, oculto y paralelo a aquél ("... infra-Estado", en palabras del autor -p. 16-). La existencia de este Estado paralelo se ha conocido merced a las investigaciones judiciales, y su aparición se ha debido, según el autor, a la crisis del papel de los partidos como instrumentos de mediación política entre la sociedad y las instituciones, y como canalizadores de las necesidades y voluntad de sus electores. Así aparece lo que el autor denomina "... empresa-partido" y "... empresa-Gobierno" (p. 17). La irrupción del primero se manifiesta claramente en Berlusconi, quien valiéndose de su control sobre los medios de comunicación y las televisiones, consiguió aquellos resultados electorales, impensables si no se hubiese dado tal situación. Pero es con el fenómeno de la *empresa Gobierno* (ocupación del Ejecutivo por una gran empresa privada), con la enorme concentración de poder político y económico que comporta, el factor que ha provocado en mayor medida la crisis de la democracia representativa y la aparición de corrupciones. De esta manera, se ha producido una confusión entre los intereses públicos y los privados y se ha contravenido, pues, el principio básico de toda democracia representativa en virtud del cual las funciones públicas no pueden ser desempeñadas por quien se encuentra privadamente interesado en ellas. Con motivo de esta confusión entre lo público y lo privado (propio de los Estados anteriores a la Edad moderna) y entre el poder político y el económico, se ha llegado así a un desmantelamiento del Estado social, a la imposición de la libertad económica salvaje y desregularizada, y a la antítesis del Estado de Derecho como sistema de límites y vínculos adecuados para impedir la formación de poderes absolutos, sean públicos o de carácter privado. En conclusión, esto ha motivado que en Italia se haya dado un fenómeno de "... regresión pre-moderna a la ley del más fuerte" (p. 21), con lo que tal circunstancia conlleva de desprotección de los más débiles.

Frente a la interesada identificación en Italia entre democracia y mayoría (el fascismo, el nazismo y el estalinismo gozaron en algunos momentos de amplio consenso), justamente para evitar caer en los absolutismos anterior-

mente reseñados, el autor concibe la democracia como "... un sistema frágil y complejo de separaciones y equilibrios entre poderes, de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías establecidas para la tutela de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a sus violaciones" (p. 22); en definitiva, el Derecho expresado en la Constitución como norma fundamental, como principio que garantiza la democracia, tanto en su aspecto formal (conjunto de procedimientos y controles para garantizar la representación) como sustancial (sistema de derechos fundamentales). En palabras del propio autor, "... el Estado constitucional de Derecho no es otra cosa que esta doble sujeción del Derecho al Derecho" (pp. 23-24). De este modelo de democracia se desprende la necesidad, según L. FERRAJOLI, de resolver dos cuestiones en su relación con el mencionado modelo de Estado de Derecho: 1º) "... el desarrollo de las garantías jurídicas e institucionales idóneas para vincular los poderes a la tutela de los derechos, y por tanto para reducir la divergencia, fisiológica dentro de ciertos límites pero patológica fuera de ellos, entre normatividad y efectividad, entre promesas constitucionales y funcionamiento real de las instituciones" (pp. 24-25); 2º) Según el autor, la solución de este segundo problema compete a la Ciencia jurídica, que hasta el momento no se ha ocupado de él, a través de una labor de "... maduración en la conciencia civil de un modelo de democracia que escape a las simplificaciones 'liberal-democráticas' basadas en la imposición de los poderes política o económicamente más fuertes sobre sujetos e intereses sociales débiles" (p. 25). La solución al primer problema pasa, según el autor, por unas mayores garantías para el cumplimiento de los derechos sociales; con respecto al segundo es necesario desarrollar una "... batalla cultural" (p. 28) dirigida a modificar la idea de identificación de la democracia con la mayoría y con el ejercicio desregularizado de las libertades económicas, y a hacer madurar en la conciencia civil una idea de democracia basada en los derechos fundamentales entendidos como vínculos y límites, negativos y positivos, a todos los poderes y, en consecuencia, como negación de cualquier poder absoluto. En definitiva, teniendo en cuenta la situación italiana, el autor aboga por "... la reafirmación del carácter sacral y pacticio de la Constitución en el imaginario social, y por la defensa de la única forma de identidad colectiva de tipo democrático, que es lo que en Estados Unidos se llama 'patriotismo de la Constitución'" (p. 29).

El tercero de los trabajos fue escrito por el catedrático de Derecho Constitucional M. A. APARICIO PÉREZ, y su título es *Modelo constitucional de Estado y realidad política*. El autor compara la propuesta normativa que representa la Constitución con la realidad política existente según el modelo de Estado que rige en nuestro país. A partir de aquí se plantea si realmente hay una deli-

mitación constitucional de la forma de Estado y, en su caso, si ese modelo ha ido respondiendo a las pautas establecidas en la Constitución. Adopta como punto de partida el hecho de que se considere a la Constitución en general, tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial (quizá por su carácter supernomativo), como un producto perfecto y acabado. El autor, sin embargo, no comparte esta opinión general refiriéndose al modo en que se plasma en la Constitución el Estado democrático, social y de Derecho, así como a la distribución territorial que en ella se diseña.

En torno a la terminología *Estado social y democrático de Derecho* (acuñada entre otros por GARCÍA PELAYO) en el sentido de una interrelación paritaria de los tres elementos, y como definidora del tipo de organización estatal que en la Constitución se persigue, el autor se muestra en total desacuerdo con ella. La califica de "... ideológica en el sentido marxiano del término" (p. 33), ya que, en su opinión, no es cierto que la Constitución permita un Estado social en la misma medida en que establece un Estado de Derecho. Lo único que hay son "principios programáticos"; el único derecho fundamental directamente exigible es el derecho a una enseñanza primaria gratuita. En cuanto a su carácter democrático no está tampoco claro, ya que en ella éste aparece sólo como un "principio", que alcanza su plenitud jurídica en su regulación infra-constitucional, de ahí que la califique de "democracia de configuración legal".

En relación con el modelo territorial de Estado, la Constitución únicamente marca un no Estado: "... pretende —en palabras del propio autor— un Estado políticamente descentralizado como contramodelo al tradicional Estado centralizado. Pero poco más" (p. 36). De esta manera, no es aceptable para el autor la tesis del carácter abierto del modelo territorial de Estado expresado en la Constitución.

En definitiva, según el autor, el problema no está solamente en la contradicción existente (potencial o en acto) entre la norma y la realidad, sino también en las propias contradicciones intranormativas de la Constitución.

El trabajo *Democracia pluralista, pluralismo institucional y gobierno del poder judicial*, escrito por S. SENESE, analiza lo que el autor denomina "principio pluralista". Parte de la constatación de que tal principio se encuentra en la base de la concepción liberal-democrática. Según el autor, presenta un doble perfil: considera como natural y positivo la variedad dentro del cuerpo social y tutela la representación y proposición de los diversos proyectos de sociedad y Estado que este variado cuerpo social expresa. A lo largo de los siglos XIX (constitucionalismo) y XX (entrada de las masas a formar parte del Estado) el pluralismo sufre el peligro de que se destruyan sus fundamentos, al

coexistir en la sociedad un gran número de visiones (incluso antagónicas) del modelo de Estado y sociedad. Así, el liberalismo trata de salvaguardar ese fundamento a través del sistema de fuentes, en cuyo vértice pone a la Constitución, para evitar un retroceso en cuanto a la tutela y garantía de los derechos fundamentales colocándolos así a cubierto de las decisiones de las mayorías políticas y sustrayéndolos, por tanto, a su disponibilidad. Con ello los sitúa también como punto de referencia y acuerdo para los diversos grupos políticos en su actuación y proclamaciones políticas. En consecuencia, el Derecho ya no está al servicio de la Política, sino al contrario: ésta toma como tarea gestionar y organizar la sociedad para garantizar estos derechos con independencia de las ideas que tengan sobre ellos los gobernantes.

Por otro lado, el principio pluralista conlleva también el pluralismo institucional; o lo que es lo mismo, el rechazo de una estructura del Estado centralizada y vertical que impida la existencia de cuerpos intermedios. Tal idea se opone claramente a las de los revolucionarios franceses al respecto, ya que éstos eran contrarios a la existencia de esas instancias intermedias, y significa asimismo una limitación al poder ejecutivo, con lo que se refuerza la independencia del poder judicial, cuyo papel se veía relegado a un segundo plano en las ideas de los revolucionarios franceses al abogar éstos por la concentración de poderes en manos del Gobierno.

Actualmente en Italia, con la creación del Consiglio Superiore de la Magistratura se ha venido a reforzar la posición de independencia del poder judicial frente a la concentración de poderes en manos del Ejecutivo, para así garantizar el pluralismo institucional y luchar, en último término, contra la corrupción; de ahí que haya adquirido mayor relevancia la jurisdicción en la lucha contra los abusos del poder.

El sexto artículo, con el título *Poder judicial y Estado social: legalidad y resistencia constitucional*, escrito por el catedrático de Derecho constitucional M. A. GARCÍA HERRERA, comienza por constatar la existencia de una importante transformación en el concepto de Política: del control de la propiedad, como fin primordial de la actividad política, se ha pasado al control de la información. ¿Cuál es la posición de la jurisdicción en este contexto? Por una parte, el autor considera que el juez cumple la función de determinar irrevocablemente el Derecho en el caso concreto, anulando su voluntad en el imperio de la ley, y su potestad se define positiva y negativamente y se asegura por medio de la reserva de jurisdicción. ¿Cómo se entiende esto con motivo de las transformaciones apuntadas anteriormente? Es claro, según el autor, que estamos en una situación de crisis del Estado social, que con el neo-liberalismo imperante, ha visto sus principios básicos alterados e, incluso, puestos en tela

de juicio. Por otro lado, constata también (como segunda e importante transformación) una crisis en el principio consagrado en el art. 117 de la Constitución (principio de legalidad en la actuación jurisdiccional) en la medida en que ha sufrido un proceso de deterioro, un vaciamiento progresivo en su función, con lo cual los jueces han encontrado múltiples dificultades para desarrollar las tareas que se les ha asignado constitucionalmente.

Como remedio a las dos crisis anteriores, el autor propone lo que él denomina resistencia constitucional; esto es, una política de Derecho dirigida a evitar el desarrollo del proceso de desconexión entre la Constitución y su desarrollo legislativo. En definitiva, según el propio autor, se trata de recuperar "... la posición de defensa y soporte de la Constitución como fundamento del ordenamiento jurídico" (p. 82). Esto no significa que se otorgue al poder judicial una dimensión política, sino simple y llanamente poner el acento en un aspecto (todas las transformaciones anteriores y lo que comportan) y ofrecer una solución al respecto basada en la posición que corresponde a la jurisdicción en nuestro Estado constitucional.

El trabajo de P. A. IBÁÑEZ *'Tangentopoli'*¹ tiene traducción al castellano se refiere a la existencia de corrupción en nuestro país actualmente; no como producto heredado del antiguo sistema político, sino con origen y desarrollo en la propia democracia. Por un lado, la financiación ilegal de los partidos políticos (determinante en la medida en que a los medios financieros son directamente proporcionales a la propaganda y difusión que alcanzan aquéllos) ha creado un auténtico estilo de vida en los modos de financiación de los partidos. Por otra parte, la llegada del partido socialista al poder en 1.982 dio lugar a un fenómeno de hiperlegitimación o manos libres en las actuaciones de una parte de los miembros que formaban parte de la estructura política del Estado: los socialistas, según el autor, partían de la filosofía del bueno per se; esto es, el Ejecutivo, por el mero hecho de serlo, cuenta con la presunción de que sus actuaciones son correctas. Hechos como la financiación ilegal de los partidos, el uso depredador de los fondos reservados, el caso GAL, el fraude del BOE, etc... son muestras claras de conductas corrompidas. Asimismo, ha surgido otro tipo de corrupción política: los reiterados intentos de obstrucción de las actividades investigadoras de los jueces (caso de los hermanos Guerra, por ejemplo) para aclarar posibles corrupciones.

Los datos anteriores son indicativos de la existencia en España, durante los años referidos, de una democracia mayoritaria; es decir, una democracia carac-

1. El término *Tangentopoli* fue empleado por la prensa italiana para referirse al conjunto de beneficios obtenidos merced a conductas de corrupción.

terizada por la existencia de una oposición débil, de un Parlamento entendido como instrumento pasivo del Gobierno y por la inoperancia del control jurisdiccional contencioso-administrativo al existir una voluntad política de no cumplir el art. 106,3º de la Constitución, sustrayéndose los actos de la Administración al un eficaz control jurisdiccional. Esto ha provocado la intervención directa del poder judicial, de ahí que se haya hablado de judicialización de la política. La razón de ello estriba, según el autor, en la degradación criminal de la política, que ha convertido a la vía penal como instancia de jurisdicción, en la auténtica protagonista. Ante esta situación, se han producido reacciones en el ámbito político-legislativo: la ampliación del privilegio procesal del art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a un buen número de altos cargos para dificultar la persecución de posibles delitos, la pretensión de atribuir la investigación criminal a un fiscal dependiente del Gobierno para fortalecer la presencia de éste en el proceso penal, la ampliación del espacio policial frente al judicial (Ley Corcuera), la creación de un superministerio para concentrar el poder en una sola persona, etc...

Así pues, según el autor "... Tangentopoli tiene traducción al castellano. Nuestra Tangentopoli particular es el resultado de una lograda fusión de antiguas y nuevas formas de corrupción política y económica. La de los gestores tradicionales de nuestra economía capitalista que, tras unos –breves– momentos de incertidumbre ante la nueva situación, hallaron buenos motivos para recuperar la calma, y la de la clase política ascendente, de la que un cualificado sector pronto renunció a la autonomía de la política, para tratar de ser también nueva clase ascendente en el sentido económico" (pp. 108-109). Finalmente, el autor se muestra pesimista en que la reacción jurisdiccional frente a la corrupción en nuestro país tenga la eficacia que atesoró la de Mani pulite en Italia.

El artículo *La Europa de los capitales y las fronteras de la acción penal*, escrito por el magistrado que formó parte de la Procura Nazionale Antimafia G. TURONE, plantea la necesidad de afrontar con decisión lo que el autor denomina cara oscura de la libre circulación de capitales en la Unión Europea; es decir, el blanqueo de dinero de procedencia ilícita. Bien es cierto que el Tratado de Maastricht prevé varios instrumentos para regular evitar tal circunstancia (la Europol, o la limitación de la libre circulación de capitales "... con medidas justificadas por razones de orden público y de seguridad pública" en su artículo 73-D), pero el autor insiste en que el blanqueo de dinero no es un fenómeno separable del contexto general del crimen organizado, sino que a su juicio es "... la otra cara de su dimensión empresarial" (p. 114).

Así, distingue entre conductas de blanqueo primarias (las ocasionadas por el mismo grupo criminal organizado que cometió el delito y, por tanto, punibles en el marco del grupo que las organizó) y secundarias (realizadas por otras personas; punibles sólo introduciendo en la ley penal un delito autónomo de blanqueo de dinero). En este sentido, según el autor, no resulta posible perseguir adecuadamente este último tipo de conductas sin perseguir también a las bandas de crimen organizado que están detrás de ellas. El modo en que ha de hacerse tales indagaciones se concreta, sobre todo, en investigaciones económicas, cuidadosas, sistemáticas y sin fronteras nacionales, específicas y concatenadas unas con las otras, en aras de verificar la conexión entre la riqueza ilícita y los delitos de los que ella depende. Este modo de proceder conlleva también la posibilidad de hallar conductas de blanqueo secundarias y empresas criminales organizadas al efecto; de ahí que resulte imprescindible, según el autor, la cooperación judicial a nivel internacional.

El trabajo *Mercado mundial y ordenamiento penal*, del magistrado C. AUGER LIÑÁN, trata el tema de la penalidad de delitos con repercusiones extraterritoriales, principalmente del blanqueo de dinero. En este sentido, señala las múltiples dificultades que su persecución plantea por su diferencia de tratamiento (o su no tratamiento) en las diferentes legislaciones estatales. Es claro, en su opinión, que la internacionalización de la criminalidad es consecuencia de la también internacionalización de las relaciones económicas; fenómenos que siempre operan con más rapidez y libertad que los instrumentos destinados a perseguirlos (la cooperación judicial internacional, la uniformización de las diversas legislaciones de los países, la creación de una legislación común al respecto, etc...). En conclusión, el autor es partidario de un trabajo coordinado de los Estados con el fin de evitar y perseguir estos delitos, cambiando las concepciones y la situación actuales al respecto.

El penúltimo trabajo del libro es del catedrático de Derecho procesal civil italiano M. TARUFFO, y su título *La justicia civil: ¿opción residual o alternativa posible?*. En él reflexiona el autor sobre el papel que corresponde a la justicia civil en el Estado de Derecho y sobre las funciones de garantía de los derechos que el ordenamiento atribuye y reconoce a cada sujeto que ha de serle atribuida a aquélla. En este sentido, el autor vincula la aparición –siglo XIX– de ideologías procesales de carácter liberista (las que conciben el proceso, no como vía para obtener decisiones justas y verdaderas en un tiempo razonable, sino como realización de la libre confrontación de las partes individuales privadas, como manifestación de su libertad y autonomía) a los momentos en los que impera el libre mercado y la no sujeción a las reglas. Como consecuencia de lo anterior, estas concepciones entienden el proceso

como medio de resolución de conflictos: lo que interesa no es cómo acaba, sino que acabe, y que la controversia sea de algún modo eliminada. Aquí, el juez juega un papel pasivo y con poderes muy limitados. Esta concepción procesal, según el autor, no está en consonancia con la observancia y garantía de la legalidad, sino que legitima a aquél que ha vencido en él; por tanto, poco tiene que ver con el Estado de Derecho, de ahí la contradicción que existe entre ambos conceptos.

El autor analiza también la concepción tradicional del proceso como subsidiario o instrumental con respecto al Derecho sustantivo, poniendo de manifiesto su carácter eminentemente limitativo, ya que pone de relieve la idea de que la función del juez se proyecta hacia el pasado (reparación del Derecho sustancial preexistente otorgado previamente al sujeto por la ley). A esta concepción opone el autor que el juez no cumple sólo una función declarativa del Derecho, sino también creadora de nuevos derechos. Esto significa que la jurisdicción adopta un papel primario y esencial, y no sólo secundario o subsidiario con respecto al Derecho sustancial. Así, en lo referente a la efectividad de la tutela judicial, el autor considera que se trata de un principio cuya validez no se encuentra aún uniformemente reconocida y cuyos contenidos son inciertos y están mal definidos.

En lo referente a los denominados ADR (Alternative Dispute Resolution: todos los modos de arbitraje, mediación o conciliación –con lo que comportan de privatización, negociabilidad y ausencia de garantías de las partes– que permiten resolver controversias sin acudir a la jurisdicción) piensa el autor que tales procedimientos ponen en tela de juicio la eficacia de la jurisdicción para hacer efectiva la tutela de los derechos, ya que aun siendo en teoría órganos imparciales e independientes los que los gestionan, la realidad es muy distinta, cometiéndose importantes abusos contra la parte más débil en el proceso; de ahí que no sean, para el autor, una alternativa global a la jurisdicción civil.

En última instancia, según el propio autor, "... existen varias buenas razones para considerar no sólo que la jurisdicción es una alternativa posible, sino que la justicia civil ordinaria es la principal y fundamental alternativa de que dispone quien tenga necesidad de hacer valer su propio derecho, y busque una tutela garantizada por la ley y no un trato dominado por relaciones socio-económicas de fuerza" (p. 147); si no se concibe como uno de los tantos métodos de resolución de conflictos con las notas características sometidas a crítica con anterioridad.

Como complemento a la visión procesalista anterior, el último artículo del libro, bajo el título *Crisis y alternativas en la Justicia civil*, escrito por el catedrático de Derecho procesal E. PEDRAZ PENALVA, parte de la consta-

tación general de la crisis actual que atraviesa la Justicia civil (lentitud, complejidad, carestía, inapropiada organización judicial, etc. ...). A continuación se interroga sobre las causas de tal situación, respondiendo que ella se debe "... a la desconfianza del legislador frente a los jueces" (p. 154), por motivos políticos y económicos, sobre todo los primeros, ya que con el desprestigio social de la judicatura se persigue, por parte de la clase política, una "... vía para debilitar o desvirtuar el control jurisdiccional de sus actos" (p. 154). Asimismo, influye la tradicional tendencia a acudir a la Justicia para resolver los conflictos, derivada de la idea de que para el adversario, con una sentencia condenatoria, las consecuencias van a ser más gravosas, de ahí el uso abusivo del recurso jurisdiccional y la consiguiente saturación de los tribunales. Frente a esta situación se ha aportado una solución fundamental: el arbitraje. Su uso tradicional en los grandes conflictos, con una acogida social casi nula y con una compleja regulación que de él se hace por la Ley de Arbitraje de 1.988 hacen de él un procedimiento inadecuado, según el autor, para evitar las dilaciones indebidas en el proceso. Para E. PEDRAZ PENALVA, la mejor solución pasa por una reforma de la justicia civil, en aras de una mayor celeridad y simplicidad, reduciendo la formalidad en el proceso, pero sin traspasar sus exigencias fundamentales. En este sentido, la racionalización de la organización judicial, la reducción de la litigiosidad a través de diversos medios y la acogida de instituciones procesales de otros ordenamientos jurídicos (como por ejemplo, las astreintes franceses, o el minitrial anglosajón, etc...) que puedan resultar compatibles con el nuestro.

Así pues, estamos ante un interesantísimo conjunto de trabajos, que desde todas las perspectivas teóricas posibles (iusfilosófica, constitucional, administrativa, judicial, procesal) y tomando como ejemplo los ofrecidos por la realidad político-jurídica concreta de España e Italia, aborda sin ambages el muy actual problema de la corrupción en las, en teoría, democracias parlamentarias occidentales.

Juan Antonio Gómez García

J. RAZ, *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics*, Oxford, Clarendon Press, 1994, 364 págs.

Este nuevo trabajo del profesor Raz consiste en una recopilación de ensayos ya publicados previamente en otros sitios, con excepción del primero de ellos, titulado "Obligaciones del bienestar", que ve la luz por primera vez en